

Del nacional al social desarrollismo: un recorrido histórico desde los años treinta hasta el gobierno de Dilma Rousseff*

Do nacional ao social desenvolvimentismo: um panorama histórico dos anos trinta até o governo de Dilma Rousseff

From national to social developmentalism: a historical overview from the thirties to the Dilma Rousseff government

Diego Crescentino**

<https://orcid.org/0000-0002-0780-199X>

RESUMEN: El presente artículo busca formular un análisis macrohistórico en torno a la comprensión de los discursos, las ideas y las claves político-normativas-sociales-económicas a lo largo del periodo 1930-2016, a fin de interpretar las relaciones de poder que posibilitaron la aplicación de diferentes perspectivas de desarrollo. Pretende con ello comprender de qué manera se desplegó el discurso del desarrollo en Brasil a lo largo de un siglo XX por demás conflictivo, y cuáles fueron las condiciones particulares de aplicación de este concepto. Así, el primer epígrafe tiene como objetivo analizar las bases sobre las cuales se asentó la coalición política y económica que dio origen al proyecto nacional-desarrollista, y las particularidades de su aplicación durante los gobiernos desde Vargas hasta Kubitschek. El segundo epígrafe analiza la transformación del modelo a partir de los planes trienales de desarrollo económico de los gobiernos de Quadros y Goulart, las alteraciones generadas de la mano de la dictadura militar y sus programas y planes

* Este trabajo forma parte de la tesis doctoral, “La identidad de Brasil como cooperante del Sur: Apogeo y crisis de un modelo de desarrollo alternativo (2003-2016)”, enmarcada en el Programa de Doctorado en Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid y financiada por un contrato predoctoral FPI-UAM 2017 del Departamento de Historia Contemporánea. La presente publicación se inserta en el marco del proyecto SI1/PJI/2019-00257 (Las relaciones de las dictaduras europeas y latinoamericanas en clave transnacional: entendimiento, rivalidades y conexiones con los Estados democráticos: 1930-1980), financiado por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid.

** Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), con estancias de investigación en Columbia University, Universidade Estadual de Rio de Janeiro, Erfurt Universität, Pontificia Universidad Católica de Rio Grande del Sur y Universidad Federal de Rio Grande del Sur. Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid y Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo. Mis intereses de investigación son la política exterior de Brasil, los mecanismos de cooperación para el desarrollo (en particular la cooperación Sur-Sur), la constitución identitaria del Sur Global y los diversos enfoques en torno a la resistencia en Relaciones Internacionales. E-mail: diego.crescentino@gmail.com.

nacionales de desarrollo, para llegar así al liberal desarrollismo y la constitucionalización de la planificación estatal a través de los planes plurianuales aún vigentes. Por último, el tercer epígrafe tiene como objetivo examinar el surgimiento de la estrategia neodesarrollista durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores, sus limitaciones y contradicciones, su transformación en una estrategia social-desarrollista, y finalmente su crisis. Se entiende que un análisis amplio de los procesos históricos y de los distintos modelos de desarrollo puede ofrecer una mejor comprensión de los aspectos políticos y sociales y los límites y retos presentes y futuros para el modelo de desarrollo proyectado en Brasil.

Palabras-clave: Brasil. Desarrollo. Nacional-desarrollismo. Liberal-desarrollismo. Social-desarrollismo.

RESUMO: O presente artigo pretende formular uma análise macrohistórica em torno à compreensão dos discursos e ideias político-normativas-sociais-econômicas ao longo do período de 1930-2016, com o objetivo de interpretar as relações de poder que possibilitaram a aplicação de diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento. Se pretende, com isso, compreender de que forma se foi construindo o discurso sobre “desenvolvimento” no Brasil ao longo do século XX, e quais foram as condições particulares de aplicação deste conceito. Assim, a primeira seção tem como objetivo analisar as bases sobre as quais se fundou a coalizão política e econômica que deu origem ao projeto de desenvolvimento nacional e as particularidades de sua aplicação durante os governos de Vargas a Kubitschek. A segunda seção analisa a transformação do modelo com base nos planos trienais de desenvolvimento econômico dos governos Quadros e Goulart, as alterações geradas pela ditadura militar e seus programas e planos nacionais de desenvolvimento, para alcançar o desenvolvimentismo liberal e a constitucionalização do planejamento estadual por meio de planos plurianuais ainda em vigor. Finalmente, a terceira seção tem como objetivo examinar o surgimento da estratégia neodesenvolvimentista durante os governos do Partido dos Trabalhadores, suas limitações e contradições, sua transformação em uma estratégia social-desenvolvimentista, e, finalmente, sua crise. Entende-se que uma análise ampla dos processos históricos e dos diferentes modelos de desenvolvimento pode oferecer uma melhor compreensão dos aspectos políticos e sociais e dos limites e desafios atuais e futuros do modelo de desenvolvimento projetado no Brasil.

Palavras-chave: Brasil. Desenvolvimento. Nacional-desenvolvimentismo. Liberal-desenvolvimentismo. Social-desenvolvimentismo.

ABSTRACT: This article seeks to formulate a macrohistorical analysis around the understanding of speeches, ideas and political-normative-social-economic keys throughout the period 1930-2016, to understand the power relations that made possible the application of different development perspectives. It aims to understand how the development discourse was deployed in Brazil throughout the twentieth century, and what were the conditions of application of this concept. Thus, the first section aims to analyze the bases on which the political and economic coalition that gave rise to the national-development project was based, and the particularities of its application during governments from Vargas to Kubitschek. The second section examines the transformation of the model based on the triennial economic development plans of the Quadros and Goulart

governments, the alterations generated by the military dictatorship and its national development programs and plans, to reach liberal developmentalism and the constitutionalization of state planning through multiannual plans still in force. Lastly, the third section observes the emergence of the neo-developmental strategy during the governments of the Workers Party, its limitations and contradictions, its transformation into a social-developmental strategy, and finally its crisis. It is understood that a broad analysis of the historical processes and the different development models can offer a better understanding of the political and social aspects and the present and future limits and challenges for the projected development model in Brazil.

Keywords: Brazil. Development. National-developmentalism. Liberal-developmentalism. Social-developmentalism.

Cómo citar este artículo:

Crescentino, Diego. “Del nacional al social desarrollismo: un recorrido histórico desde los años treinta hasta el gobierno de Dilma Rousseff”. *Locus: Revista de História*, 27, n. 2 (2021): 339-366.

Introducción

Con el advenimiento de la crisis internacional posterior al crac del 29, el modelo agroexportador brasileño halló sus límites, dando paso al surgimiento de un modelo de desarrollo asentado en la industrialización por sustitución de importaciones. La revolución de 1930 trajo consigo múltiples alteraciones políticas, económicas, institucionales y sociales, e inauguró, como consecuencia, una estructura de poder que alteraría, a lo largo de las décadas siguientes, la conformación de las élites gobernantes. A partir de un modelo político paternalista con tintes autoritarios, el régimen varguista defendió un nacionalismo ligado a la modernización y a la industrialización que asignaba un rol central a la incipiente burguesía industrial. A través de ello, se generó una relación directa entre desarrollo e industrialización, que sentó las bases de lo que posteriormente se transformaría en la estrategia nacional desarrollista. Su eje residía en un esfuerzo por transformar el núcleo urbano industrial en el polo dinámico de la economía brasileña. A partir de entonces, este incipiente modelo de desarrollo implicó la generación de un consenso industrialista que se mantendría, en mayor o menor medida, hasta nuestros días.

El presente artículo busca formular un análisis macrohistórico en torno a la comprensión de los discursos, las ideas y las claves político-normativas-sociales-económicas a lo largo del periodo 1930-2016, a fin de interpretar las relaciones de poder que posibilitaron la aplicación de diferentes perspectivas de desarrollo. Con ello, pretende comprender de qué manera se desplegó el discurso del desarrollo en Brasil a lo largo de un siglo XX por demás conflictivo, y cuáles fueron las

condiciones particulares de aplicación de este concepto. Así, el primer epígrafe aborda las bases sobre las cuales se asentó la coalición política y económica que dio origen al proyecto nacional-desarrollista, y las particularidades de su aplicación durante los gobiernos desde Vargas hasta Kubitschek. El segundo epígrafe analiza la transformación del modelo a partir de los planes trienales de desarrollo económico de los gobiernos de Quadros (1961) y Goulart (1961-1964), las alteraciones generadas de la mano de la dictadura militar y sus programas y planes nacionales de desarrollo, para llegar, así, al liberal desarrollismo y la constitucionalización de la planificación estatal, a través de los planes plurianuales aún vigentes. Por último, el tercer epígrafe examina el surgimiento de la estrategia neodesarrollista durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores, sus limitaciones y contradicciones, su transformación en una estrategia social-desarrollista, y, finalmente, su crisis. A través de la presente propuesta, se entiende que una exploración histórica amplia, enfocada en los distintos modelos de desarrollo, permite ofrecer una mejor comprensión de los aspectos político-ideológicos, socio-económicos e institucionales que sirvieron de fundamento para el surgimiento de marcos interpretativos y narrativas en torno al desarrollo.

El proyecto nacional desarrollista: de Vargas a Kubitschek

El centenario del Brasil independiente en 1922 encontró al país en una situación particular. La década de 1920 estuvo marcada por los límites propios de un régimen político en decadencia, integrado en una crisis económica internacional de la cual el modelo agroexportador paulista, limitado a la hora de importar, exportar o hacer frente a los pagos de deuda, no podía escapar. Esta situación se manifestó, a su vez, a través de múltiples y profundas protestas sociales de las fuerzas políticas olvidadas por la Primera República (1889-1930), que abogaban por la apertura de nuevos canales de participación política. Bajo el dominio anarcosindicalista del Comité de Defensa Proletaria, la clase obrera se encontraba en intenso movimiento desde las huelgas paulistas y cariocas de 1917. Esperanzada ante el despertar de las experiencias revolucionarias regionales e internacionales, impulsaba su organización por medio de la fundación de nuevos movimientos políticos, tales como el Partido Comunista (1922). Desde las fuerzas armadas, los Movimientos Tenentistas¹ fueron la cara visible del descontento de los militares de bajo rango con el régimen, generando un mito que llega hasta nuestros días. También en este contexto ocurrieron eventos culturales de gran magnitud, que marcaron un antes y un después en la comprensión de la brasileñidad, tales como la *Semana de Arte Moderna*. Este conjunto de transformaciones —sumados

¹ Tales como la Revuelta del Fuerte de Copacabana en 1922, la Revolución de São Paulo en 1924 o la Columna Prestes entre 1924 y 1927.

al desarrollo industrial y a la diversificación de la agricultura— funcionaron como estímulos para la alteración del escenario político hasta entonces vigente.

Tal crisis de hegemonía condujo, en 1930, a una revolución triunfante liderada por Getulio Vargas. Con el desplazamiento de las oligarquías paulistas y mineras del poder, tanto el gobierno provisional de Vargas como la posterior Segunda República (1930-1937) procuraron incorporar al escenario político a los sectores relegados por la Vieja República. Para ello, resultó central reorganizar el territorio, promoviendo una centralización del poder que redujo profundamente la autonomía de los Estados federales. Tras sofocar la revolución constitucionalista de 1932 y cooptar o contener al tenentismo y a los movimientos sociales, la constitución de 1934 plasmó una nueva estructura de poder, gobernada por una inestable alianza que no tardó en enfrentar nuevos límites (Dabène 1999, 92-93). Profundamente exitosa en este periodo fue, también, la limitación de la creciente influencia de los comunistas en los sindicatos. Ello fue llevado a cabo, principalmente, a través de un proceso tanto regenerativo —canalizado, fundamentalmente, a través del ministerio de Trabajo—, como represivo y de control social.

De la mano de un modelo político paternalista y con tintes autoritarios, Vargas defendió un nacionalismo ligado a la modernización y a la industrialización con integración territorial. En esta estructura, dos agentes resultaron cruciales: “las ciudades, puntas de lanza del progreso en las inmensidades rurales, y el ejército, como institución que podía escapar a los intereses oligárquicos regionales, y tenía una cobertura verdaderamente nacional” (Pérez Brignoli 2018, 349). Por otra parte, conforme a lo que estaba sucediendo en la región, el Estado brasileño estuvo caracterizado, en este periodo, por realizar grandes concesiones a las clases medias y obreras industriales. Por medio del reconocimiento de derechos sociales y la inclusión de las estructuras sindicales como legítimas representantes del proletariado, Vargas sumó el apoyo de amplios sectores en una alianza política gobernante que, además, contaba con el beneplácito del incipiente sector industrial emergente, la Iglesia y gran parte del ejército.

En este sentido, si bien, aún hoy, la producción historiográfica que analiza este fenómeno se debate en torno a la naturaleza del Estado resultante de la revolución de 1930, existen tanto lecturas que lo caracterizan como conservador, como interpretaciones que resaltan su condición de modernizador de la economía brasileña². Más allá de las diferentes interpretaciones que puedan hacerse, la recomposición de las élites políticas condujo a que la estructura de gobierno presentara una característica diferente de la previa: ya no se trataba de una expresión inmediata de la jerarquía social y económica, ni de los intereses de una sola clase. Empero, el incipiente modelo de desarrollo

² Sobre esta cuestión ver: Gertz 1991; Pandolfi 1999; Gomes 2005; Skidmore 1988; Silva 1975; Basbaum 1985; Cancelli 1993.

por sustitución de importaciones implicó la generación de un consenso industrialista, asentado sobre una burguesía que, hasta entonces, había estado ausente en el ejercicio de grandes cuotas de poder en el sistema político brasileño.

De manera coherente con las teorías del desarrollo en auge, los líderes industriales lograron plasmar un discurso que defendía un Estado interventor de la economía, promotor de la integración del mercado interno, y protector de la industria nacional y el bienestar de la Nación. A través de ello, se generó una relación directa entre desarrollo e industrialización, que sentó las bases de lo que en la década del 50 se transformaría en la estrategia *nacional desarrollista*. La acción del Estado se orientó, como consecuencia, hacia tres objetivos: la reglamentación de los factores productivos, la redefinición del papel de la agricultura, y la inversión en emprendimientos productivos de infraestructura. El sentido de ello residía en un esfuerzo por transformar el núcleo urbano industrial en el polo dinámico de la economía brasileña. Por ello, la idea de que el programa industrialista era una precondition para la definición de un proyecto de fortalecimiento nacional cobró fuerza integrando cuatro prioridades fundamentales: a) la superación de la vulnerabilidad externa de la economía brasileña sólo podía lograrse a través de la industria. Frente a ello, b) era necesario condenar la exportación de bienes primarios como sustento exclusivo de la economía. Esto a su vez requería c) el establecimiento de una identidad entre industria y grandeza nacional; y d) el fomento de la industrialización pesada para la infraestructura básica coordinada y sostenida por el Estado. Así, pese a que su acción económica se encontrase aún comprometida con los sectores tradicionales de la economía, la élite industrial brasileña se transformó en la principal beneficiaria de los cambios que se sucedieron (Mendonça 2008, 24-27).

A partir de 1934, las presiones al gobierno de Vargas se hicieron sentir desde dos tendencias. Por un lado, desde un frente de izquierda multisectorial y multclasista, organizado en torno a la Alianza Nacional Libertadora. Unificada en torno a la lucha contra el fascismo, el imperialismo y el latifundio, esta organización intentó llegar al poder a través de un fallido golpe de Estado en 1935, conocido como la *Intentona Comunista*. Por el otro lado, la corriente fascista del integralismo brasileño, que procuró, desde una perspectiva cristiana y ultranacionalista, crear una nueva síntesis de ideas basadas en el carácter pluricultural y multirracial de Brasil, llegando, también, a perpetrar un golpe de estado en 1938. Paradójicamente, hombres de una y otra vertiente formaban parte de diferentes ministerios del gobierno de Vargas, como el Ministerio de Educación y Salud encabezado por Gustavo Capanema (Grecco 2015).

Entre 1937 y 1945, la proclamación de una nueva constitución dio paso a un autogolpe y a la instauración del Estado Novo, el cual determinó el cierre del Congreso Nacional y la centralización del poder en la figura de Vargas. Con carácter autoritario y corporativo, el Estado

Novo fue estructurado en torno a una burocracia profesionalizada, legitimada por el ejército, la iglesia y los sindicatos. A su vez, en continuidad con el periodo previo, el énfasis industrialista se asentó en el intervencionismo estatal de la economía nacional. Este énfasis influyó significativamente en la lectura de la equidistancia pragmática esbozada en política exterior, a través de la cual Brasil arriesgó un doble juego relacional entre los intereses alemanes y los estadounidenses (Moura 1980, 62-63). Con este sentido pragmático, El Ministerio de Relaciones Exteriores explotó el miedo de la colaboración brasileño-alemana en la industria siderúrgica para obtener beneficios en sus relaciones con Washington (Hilton 1975, 772). De hecho, los resultados del ingreso del país a la Segunda Guerra Mundial y el realineamiento de Brasil a los Estados Unidos se plasmaron, inmediatamente, en una serie de créditos destinados a la industria siderúrgica nacional, cristalizados a partir de 1941 a través del proyecto de Volta Redonda (Dinius 2010). Ello representó una oportunidad con grandes consecuencias futuras, pues su inauguración en 1947 permitió a Brasil desarrollar su industria automovilística de manera autónoma.

Con el fin de la guerra, las presiones por una redemocratización se hicieron fuertes. Paralelamente, el liberalismo ricardiano resultante del predominio norteamericano en el sistema internacional fue institucionalizado por medio de los acuerdos de Bretton Woods. A nivel teórico, el triunfo de la lectura de White sobre la de Keynes confiaba en la expansión de las ventajas comparativas como mecanismo de desarrollo. Consecuentemente, iba acompañado de una fuerte crítica, a nivel internacional, hacia el intervencionismo estatal, sobre todo de los regímenes occidentales no democráticos. En este contexto, las presiones internacionales se conjugaron con las internas, con lo cual las demoras para la apertura democrática del Estado Novo provocaron, en 1945, que las fuerzas armadas realizaran un nuevo golpe de Estado. En 1946, una nueva constitución inauguró la República Nova (1946-1964), convocando a unas elecciones que ganaría Gaspar Dutra, un militar participante en el golpe que había sido previamente ministro de Guerra de Vargas.

A partir del gobierno de Dutra, de corte liberal, fue consolidándose un modelo de desarrollo que transformó los principios del intervencionismo estatal, tornándolo compatible con la propuesta estadounidense. Esta lectura se vio traducida en una retracción del nacionalismo proteccionista y una apertura a las inversiones extranjeras, con iniciativas que combinaban la participación público-privada nacional y extranjera, tales como el plan S.A.L.T.E. (salud, alimentación, transporte y energía) de 1948 (Almeida 2004, 161-164). Como consecuencia, se generó un debate que dividió aguas entre dos vertientes en torno al rol del Estado y la industrialización. Por un lado, la postura defendida por la pequeña burguesía nacional desarrollista, que buscaba promover un modelo autónomo de desarrollo industrial, enfocado en la nacionalización de actividades productivas

estratégicas (energía, siderurgia, comunicaciones) y en el control de las remesas al exterior de las empresas extranjeras en territorio nacional. Por el otro lado, la apuesta de la mediana y gran burguesía, que entendía que la asociación con el capital extranjero era la única forma de promover la modernización de la industria brasileña (Wasserman 2010, 197). Este debate se dio en un contexto en el cual el fin del conflicto bélico condujo a que los capitales estadounidenses, europeos y japoneses volvieran a centrarse en los países periféricos.

Con el retorno de Vargas al poder (1951-1954), las tensiones políticas recrudecieron en torno a la retórica dicotómica entre nacionalistas y entreguistas, en un contexto de fuerte inflación y dificultades para el sector industrial. Tales lecturas se tradujeron en dos proyectos opuestos. Por un lado, el pensamiento nacionalista, de inspiración cepalina y catalizado por el Instituto Superior de Estudios Brasileños (ISEB), que abogaba por un proyecto de desarrollo industrial autónomo ligado a una necesaria reforma social. Por el otro lado, el pensamiento liberal, representado por la Escuela Superior de Guerra, promotor de las ventajas comparativas de la agricultura (Vizentini 2005, 13). Al igual que había hecho durante sus periodos de gobierno previos, Vargas se transformó en vocero de la retórica nacionalista. Ello se tradujo en la nacionalización de actividades productivas estratégicas por medio de la creación de empresas estatales, como PETROBRAS o ELECTROBRAS³. Pero también se vislumbró en una promoción de la intervención del Estado en el sector financiero, por medio de medidas como la creación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, en 1952, o la instrucción 70 de la Superintendencia de la Moneda y el Crédito (SUMOC), en 1953⁴. Tras el suicidio de Vargas, la apertura paulatina a la inversión extranjera no se hizo esperar. En 1955, el presidente Café Filho (1954-1955) derogó la instrucción 70 de la SUMOC y autorizó, a través de la instrucción 113, la importación de insumos y maquinaria industrial. La apertura facilitada por el nuevo orden normativo se transformó, como consecuencia, en una de las piedras angulares del modelo nacional desarrollista implantado con fuerza por Juscelino Kubitschek (1956-1961).

Más cercana a la teoría de los cinco estadios de Rostow, la política de desarrollo de los *cinquenta años en cinco* (el eslogan de su Plano de Metas⁵) representó, a la vez, una ruptura y una continuidad con la política varguista. En este sentido, mientras la política económica permanecía respaldada por la industria y por los sectores del empresariado nacional, la aplicación de la

³ En el caso de ELECTROBRAS, si bien la propuesta de creación data de 1954, su propuesta generó gran oposición en el Congreso y fue finalmente fundada en 1962.

⁴ Que protegía la producción industrial a través de una tasa de cambio múltiple y limitaba a un 10% las remesas al exterior de filiales extranjeras en el país.

⁵ Que constaba de treinta y un objetivos resumidos en cinco grandes metas: energía, transporte, alimentación, industrias básicas y educación (capacitación de personal técnico).

instrucción 113 se vio plasmada en una inmediata internacionalización de la economía brasileña, permitiendo atraer capital a través de créditos e inversión extranjera directa. Ello se tradujo en la instalación de empresas extranjeras en sectores industriales que se convertirían en motores del crecimiento económico brasileño hasta 1980 (Arend 2009, 21)⁶. En efecto, entre 1955 y 1961, el PBI per cápita creció un 4% anual, gracias, en gran parte, al aumento del valor de la producción industrial en un 80% (Fausto 2012, 364-365), pero también a un significativo endeudamiento público.

El eje del nacional desarrollismo de Kubitschek giró, así, en torno a la transformación de las funciones del Estado interventor para la modernización de la industria nacional, de la mano de una triangulación entre el capital extranjero, la iniciativa privada nacional, y el control estatal de los recursos básicos. Su propuesta residía en una industrialización capitalista planificada y coordinada por el Estado, como principal tomador de decisiones finales de inversión. Se entendía, por tanto, que el libre mercado no era capaz de generar un proceso de industrialización (Silva 2000, 78). Como resultado de la modernización de la producción, llegaría una distribución más igualitaria de los beneficios del crecimiento, por lo cual, en principio, la noción superaba las lecturas economicistas.

El Estado debía transformarse, pues, en un planificador y orientador de la economía, actuando como banquero del capital privado en aquellas actividades que permitiesen la libre competencia —controladas indirectamente a través de agencias de financiamiento—, y, a la vez, como propietario en los sectores industriales donde la competencia fuese inviable —principalmente el energético o aquellos relativos a la seguridad nacional—. El desarrollo era, en consecuencia, “un proceso de acumulación de capital y de incorporación de tecnología a través del cual los perfiles de la distribución de los recursos disponibles aumentarían la calidad de vida de la sociedad como un todo” (Salas Oroño y Melendi 2017, 43). La intención final de este modelo era librar al país del deterioro de los términos de intercambio y de su dependencia del sector agrario exportador, siendo capaz de financiar el progreso tecnológico. Como resultado, la industrialización permitiría superar los problemas de desigualdades sociales y regionales producto del subdesarrollo.

Por supuesto, tal y como había sucedido durante la “Era Vargas”, la construcción de un discurso legitimador fue esencial durante la puesta en práctica del proyecto nacional desarrollista. La generación de una lógica dicotómica entre nacionalistas y entreguistas explicaba los límites del desarrollo a partir de las grandes divergencias entre ambos sectores antagónicos. Así, por un lado, con el primer concepto se aludía a las fuerzas sociales nacidas de la expansión urbano-industrial del país (proletariado, empresariado industrial y clase media) como símbolo de las fuerzas dinámicas

⁶ Particularmente en el sector energético y siderúrgico, pero también en la industria automovilística y aeroespacial, entre otras.

de la nación y garantía del desarrollo. Por el otro lado, con el segundo se hacía referencia a las oligarquías agrario-exportadoras tradicionales y sus aliados de la burguesía comercial, ligada al capital comercial y financiero internacional. Desde esta cosmovisión, eran tanto los responsables de la inmovilidad social, como el principal obstáculo para la industrialización. Así, la retórica oficial defendía que, mientras el país siguiese ligado al camino trazado por los segundos, no podría superar los límites impuestos por el deterioro de los términos de intercambio ni de su condición de subdesarrollo y desigualdad.

No obstante, tal retórica enfrentó una grave crisis interna sobre el final de la década, cuando, en el seno del ISEB, principal defensor de la teoría del nacional-desarrollismo, Hélio Jaguaribe, publicó el libro *O Nacionalismo na Atualidade Brasileira* (1958). En él, Jaguaribe reconocía un redireccionamiento de la inversión extranjera hacia la industria, contradiciendo, con ello, la tesis básica de los nacionalistas hasta ese momento. Al conceder un papel positivo a la inversión extranjera en la industria, Jaguaribe anticipó la fundación de la *nueva teoría de la dependencia*, “que se formularía en São Paulo y Chile en la década de 1960, después del golpe de Estado de 1964 y la reanudación del desarrollo en 1967, y sería dominante en América Latina en la década de 1970” (Bresser-Pereira 2004, 51). Esta crisis se integró al cambio de la retórica liberal, para cuya intelectualidad, el fracaso en su defensa del Brasil agrícola condujo a que también ellos adoptaran un industrialismo ligado al sector privado (Pereyra Doval 2017, 163).

El inmediato despido de Jaguaribe del ISEB no evitó la posterior crisis del pacto nacional desarrollista, que se tradujo, en última instancia, en la derrota electoral del partido de Kubitschek, y en la llegada de Jânio Quadros (1961) a la presidencia. En síntesis, este primer periodo formativo del nacional desarrollismo se vio atravesado por la transformación del modelo de desarrollo brasileño. En el contexto del deterioro de los términos de intercambio sufrido por las economías latinoamericanas en el periodo posterior a la gran depresión, la economía brasileña pasó de estar asentada sobre un modelo agroexportador, regulado por un Estado gendarme dirigido por las oligarquías paulistas y mineras, a la configuración de un consenso industrialista, sostenido por un Estado interventor que favoreció la sustitución de importaciones por industria nacional y la modernización de la economía con integración territorial. Ello contribuyó, a su vez, tanto a una mayor cohesión del mercado interno, como a una incorporación, en el escenario político, de ciertos sectores relegados por la Vieja República.

Del Plan Trienal de Desarrollo Económico y Social al liberal-desarrollismo

Con el fin del gobierno de Kubitschek, las limitaciones del modelo desarrollista⁷ fueron integrándose, paulatinamente, a una coyuntura de recesión de la economía mundial y una creciente crisis política. La aceleración del proceso inflacionario y el deterioro de la balanza externa se convirtió en el problema central de los gobiernos, conduciendo a que el eje de la economía pasase del establecimiento de políticas de desarrollo, a la implementación de estrategias de estabilización (Silva 2000, 77). El costo social de estas políticas condujo, por supuesto, a un periodo de mayor descontento y movilización social. Con constantes amenazas de sufrir un nuevo golpe militar, Quadros (1961) y Goulart (1961-1964) se sucedieron en el poder en el escenario de una creciente inestabilidad política y económica. La conjugación en el poder de dos tradiciones políticas adversas no colaboró con la conformación de una alianza que garantizara una estabilidad al gobierno. Ello fue posible debido a que la elección del presidente y de su vice eran votadas separadamente. Así, de tradición contraria al varguismo, Jânio Quadros llegó al poder acompañado del vicepresidente João Goulart, antiguo ministro de trabajo de Vargas, uno de sus herederos políticos, y exvicepresidente durante el gobierno de Kubitschek.

El corto gobierno de Quadros y la accidentada toma de poder de Goulart ocho meses después representaron, a las claras, la inestabilidad del gobierno constitucional que se mantendría en el poder hasta el golpe de 1964. En el ámbito internacional, la revolución cubana de 1959 visibilizó la posibilidad de que una revolución de izquierda fuese posible. La radicalización de las ideas y una mayor combatividad sindical se vieron traducidas en una mayor polarización social, lo cual encendió las alarmas de la derecha política y del intervencionismo norteamericano. Sin dejar de lado el accionar militar, la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy había centrado, hasta entonces, la retórica de la contención de la amenaza comunista en el fomento de la cooperación entre los gobiernos del continente. La defensa de la libertad se veía acompañada, así, de un compromiso por una integración política y económica (es decir, entre democracias liberales) que conducirían, naturalmente, a un bienestar social. Con el asesinato de Kennedy y el ascenso de Johnson al poder (1964), la campaña de desestabilización política de los Estados Unidos contra el gobierno de Goulart quedó articulada en torno a la Operación “Brother Sam” (Fico 2008, 65-66).

En este complejo contexto político y económico, la estrategia de desarrollo de Goulart estuvo sintetizada en torno al objetivo inmediato de frenar la desaceleración del crecimiento y controlar la inflación, sin atenuar la intervención gubernamental en el ámbito social, ni dejar de

⁷ Particularmente, la inflación como fenómeno estructural, y por supuesto, la desnacionalización progresiva de la economía, que se tradujeron en una inestabilidad monetaria interna y un desequilibrio de las cuentas externas insostenible a mediano plazo.

lado el objetivo de la industrialización a largo plazo. A pesar de haber sido ideado por Celso Furtado, uno de los mayores representantes de la CEPAL, el Plan Trienal de Desarrollo Económico y Social estableció instrumentos ortodoxos para estabilizar la economía, tales como el control del déficit público y de las emisiones monetarias. El Plan procuró, así, asegurar tanto el cumplimiento de las obligaciones externas, como la financiación del gobierno por medio del aumento de las exportaciones, la reforma tributaria, y la inversión extranjera. Con todo, no sería el último teórico cepalino con un accionar ambiguo en relación con su pensamiento en la arena política brasileña.

Asediado a nivel político, económico y social, y frente al resquebrajamiento de la alianza que daba legitimidad a su gobierno por el fracaso de su plan de estabilización, Goulart decidió mover fichas y dar un paso a la izquierda a comienzos de 1964. Ello se tradujo en una serie de decretos con fuertes objetivos sociales, tales como la reforma agraria, la nacionalización de las refinerías que no estaban en manos de Petrobras, una reforma urbana que afectaría los alquileres, y una fuerte campaña de sindicalización para movilizar a los campesinos (Marini 2008, 53-54). Poco después, las fuerzas armadas, apoyadas por las oligarquías terratenientes tradicionales, buena parte de los gobernadores provinciales, gran parte de la clase media y la burguesía dieron curso a un nuevo golpe de Estado, con el apoyo económico y militar de los Estados Unidos. Este accionar se convirtió, como consecuencia, en un proceso fundacional para la larga tradición de gobiernos militares que afectaría a la región latinoamericana hasta fines de la década de 1980: la Doctrina de Seguridad Nacional.

De la mano de la supresión de los derechos constitucionales en una lucha constante contra posibles insurrecciones comunistas, el Estado resultante se basó en una alianza entre las fuerzas armadas, empresarios y tecnoburócratas. Como consecuencia, el régimen civil-militar inició una nueva etapa de gobiernos autoritarios concentrados en la consolidación de un modelo periférico de capitalismo dependiente, que buscó legitimarse a través de la estabilización macroeconómica. El objetivo fue lograr la integración de la economía nacional a las condiciones del mercado internacional, gracias al abandono de las políticas redistributivas en pos de un aumento de la producción. Para este fin, el régimen se concentró en la formulación de políticas anticrisis concertadas a partir de dos series de herramientas. Primero, el Plan de Acción Integrado del Gobierno (1964-1967), con énfasis en la industrialización de bienes de consumo durables. Posteriormente, los Programas de Desarrollo Estratégico (1968-1970) y de Acción de Metas y Bases del Gobierno (1970-1973), organizados en torno a la generación de recursos para la expansión económica y la institucionalización de la concentración del capital y las empresas.

Estos objetivos se dieron de la mano de políticas de ahorro fiscal —por medio de la reducción de salarios— y atracción de capitales, con un endeudamiento externo que se transformó

en un problema creciente para la economía brasileña. A pesar de ello, las bases del proceso de industrialización no fueron alteradas en este periodo. Esto se manifestó, particularmente desde 1968, a través de la planificación de grandes proyectos de infraestructura en los sectores energético, de transportes, comunicaciones, siderúrgico y minero, y la profundización del proceso de industrialización pesada en el país. Obras como la central hidroeléctrica binacional de Itaipú (junto a Paraguay), la central hidroeléctrica de Tucuruí, la usina nuclear de Angra dos reis o la autopista transamazónica fueron proyectadas en este periodo, de la mano de la fundación de 231 nuevas empresas estatales (Gremaud, Vasconcellos y Toneto Júnior 2004). Los resultados inmediatos llevaron a que los índices de desempeño de la economía alcanzasen su apogeo con tasas de crecimiento inéditas entre 1968 y 1973, dando lugar a un “milagro brasileño” apoyado sobre una sobreexplotación del trabajo sin redistribución de la riqueza, y generando un aumento sin precedentes de las desigualdades sociales.

Sin embargo, los límites del milagro económico comenzaron a hacerse notar con los cambios de signo de la coyuntura internacional, cuando la crisis del petróleo condujo a serios desequilibrios económicos. Con el alza de los precios del crudo, la matriz energética brasileña, fuertemente sustentada en el petróleo, se vio profundamente afectada. Ello repercutió sobre el sistema productivo nacional, lo cual afectó gravemente a la balanza comercial, que debió acudir progresivamente a tasas de endeudamiento externo cada vez mayores. A fin de paliar estos límites, el gobierno lanzó tres Planes Nacionales de Desarrollo (PND). Por un lado, el I PND “anticipó el periodo de mayor importancia para la planificación estatal de la economía, y (...) supuso la culminación de la estrategia de desarrollo guiada por el Estado” (Bachiller Cabria 2012, 8). Previendo las limitaciones económicas externas, el II PND se concentró en la profundización de una reforma estructural que redujese la dependencia externa, apostando por una industrialización productora de bienes de capital (máquinas y equipamiento), bienes intermedios, e insumos básicos. Sin embargo, la profundización de la crisis económica condujo a una crisis política, que comenzó a deteriorar profundamente la ya erosionada legitimidad del régimen, provocando un lento proceso de retorno a la democracia.

La ruptura de la alianza entre Estado, industria nacional y capital extranjero se encontró en aprietos ante el aumento de los tipos de interés de la deuda externa y la consiguiente suspensión de los flujos crediticios hacia las economías latinoamericanas tras la crisis mexicana de 1982. Ello se sumó a las tensiones sociales, producto de la represión social y de las políticas económicas de los años previos, y condujo a la transformación del paradigma del desarrollo hacia una nueva etapa de ajustes ortodoxos, en la que pasaron a preponderar los factores externos a la economía nacional (Mendonça 2008, 122). Frente a este panorama, tanto el III PND (1980-1985) como el I Plan

Nacional de Desarrollo de la Nueva República (1985-1989) limitaron profundamente el accionar del Estado a aquellos sectores que se consideraban básicos para el desarrollo y el crecimiento económico. Como corolario, entre 1985 y 1990 tuvo lugar la fase final de un largo proceso de transición hacia la apertura democrática, concluyendo en la institucionalización de la sexta república brasileña y el acceso de Fernando Collor de Mello al poder (Linz y Stepan 1999, 205). En el seno de esta trayectoria, la Constitución de 1988 rescató la planificación estatal a través de la implementación de planes plurianuales (PPA) vinculantes para las leyes presupuestarias. Empero, como venía ocurriendo desde el III PND, el PPA de 1991-1995 tuvo una existencia meramente formal, y su elaboración se dio con el objetivo de cumplir con la normativa legal (Lessa, Couto y Farias 2009, 89-90).

Como consecuencia, el retorno del régimen democrático no implicó una alteración de la alianza entre el capital transnacional, el sector financiero externo y ciertos sectores de la burocracia estatal. La política de desarrollo de Collor (1990-1992) se centró, así, en una serie de políticas de desmantelamiento del modelo desarrollista, impulsadas por la ortodoxia económica de la banca internacional y resumidas por el Consenso de Washington (1989). Sus ejes giraron en torno a la liberalización económica para la atracción de la inversión privada extranjera, un ajuste estructural que permitiese la reducción del gasto público, y la privatización de empresas públicas a través del Programa Nacional de Desestatización. Tras dos años en el gobierno, el presidente se vio comprometido en un caso de corrupción que llevó a movimientos sociales y sociedad civil a solicitar su juicio político (*impeachment*), provocando su destitución y la consiguiente asunción del vicepresidente Itamar Franco. Frente a la necesidad de lograr una estabilidad macroeconómica y poner freno a la problemática crónica de la inflación, el gobierno de Itamar (1992-1994) lanzó el Plan Real, que estableció una paridad cambiaria con el dólar, limitando la emisión monetaria al nivel de las reservas internacionales del país. Impulsado por el éxito logrado, el entonces Ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), fue elegido presidente en 1994.

Como el gran articulador del Plan Real, Cardoso asumió su cargo teniendo como objetivos principales devolver al país la estabilidad política y macroeconómica, buscando, a su vez, lograr una modernización productiva gracias al ingreso de tecnología avanzada y a la apertura a la competencia internacional. La continuidad de las políticas aperturistas condujo, de este modo, a nuevos programas de ajuste estructural. Estos pretendieron lograr un equilibrio fiscal a través de una reforma del Estado que perseguía la transferencia de sus funciones empresariales y sociales al ámbito privado, limitando su rol al de regulador, y valiéndose del aporte constante de capitales externos. Los desafíos de este *Estado logístico* quedaron definidos, como consecuencia, en términos de la absorción de las fuerzas nacionales generadas por el Estado desarrollista, y su inserción en el

mundo globalizado. Ello comprendía transformarse en el responsable del proceso privatizador, pero también de la creación de empresas públicas y de capital mixto que resultasen competitivas internacionalmente⁸. Con este fin, la apertura tendría que medirse en materia de la adaptabilidad de los empresarios locales (Cervo 2002, 9-10).

El concepto de desarrollo fue entonces ligado al de mercado, y el de modernización conformó un binomio con la libre competencia. Fue esta concepción, precisamente, la que procuró extender José Serra desde el Ministerio de Planificación, exteriorizando estas ideas a través del Plan Plurianual 1996-1999. Sus directivas giraron, así, en torno a la construcción de un Estado moderno y eficiente, la reducción de los desequilibrios sociales y espaciales del país, y la modernización productiva de la economía brasileña. En este contexto, el concepto de modernización hacía referencia directa a dos procesos paralelos. Por un lado, a una renovación de la estructura productiva industrial, centrada en una racionalización de los procesos de producción, y una integración de nuevas formas de gestión para facilitar la reducción de los costos y aumentar la productividad. Ello se vio traducido en el abandono de aquella producción que no resultase competitiva, la profundización de la subcontratación y tercerización de empleados, y la sustitución de proveedores locales por proveedores externos con menores precios. Por otro lado, una innovación vinculada a la agenda del consumo, facilitada tanto por la apertura del comercio a la importación, como por la entrada de empresas multinacionales que complejizaron la competencia (Machado 2008, 94-95).

No obstante, al interior del bloque dirigente del gobierno de Cardoso existían fuertes divisiones internas vinculadas por el ideario del liberalismo económico imperante. Por un lado y de carácter mayoritario, existía una corriente liberal fundamentalista continuista de las políticas de Collor de Mello, y apoyada por el empuje de los grandes organismos financieros internacionales. Seguidor del texto programático que ofrecía el Consenso de Washington, este grupo estaba orientado por la necesidad de una estabilización monetaria y comprometido con la promoción del libre mercado. Por el otro lado, existía una corriente liberal desarrollista, más inclinada a equilibrar la estabilidad monetaria con un crecimiento competitivo de la economía local, a través de una intervención moderada del Estado (Sallum Jr. 2003, 45).

La existencia de estas dos tendencias acabó dando un carácter híbrido a las acciones del gobierno de Cardoso. Ello se tradujo en una redirección del accionar del Estado a la esfera financiera sobre las actividades productivas y comerciales, lo cual, preso del ingreso de capitales especulativos, generó una constante expansión de la deuda interna y externa. Como resultado, el

⁸ Sobre todo, en los sectores de la industria minera, siderúrgica, aeronáutica y aeroespacial.

Plan Plurianual 1996-1999 mantuvo la premisa básica de consolidar la estabilidad de los precios, principales responsables, según la lectura oficial, de la reanudación de las inversiones productivas y la inauguración de una nueva fase sostenida de desarrollo. Sin embargo, este hecho no impidió que el desarrollismo liberal inspirara algunas políticas que contrarrestaban las consecuencias negativas de la ortodoxia para sectores económicos específicos, fomentando políticas intervencionistas acotadas para promover la competencia.

Con el advenimiento de las crisis económicas de finales del siglo XX se desató en Brasil un nuevo periodo inflacionario y una salida de capitales que desencadenó una devaluación del real. Frente a este escenario, fue inaugurada una nueva gestión macroeconómica, que implicó algunos cambios en las relaciones entre el Estado y los distintos sectores económicos, provocando un fortalecimiento de la corriente liberal desarrollista que seguiría creciendo hasta las elecciones del año 2002. De manera tardía, el Plan Plurianual 2000-2003 se hizo eco de esta crisis, procurando rescatar la cuestión social frente a los efectos de la globalización asimétrica. Sin embargo, frente al advenimiento del estancamiento internacional de principios de la década del 2000, las dificultades para cumplir con los compromisos de deuda interna y externa, la crisis en Argentina y el riesgo político asociado a las elecciones presidenciales, las ya deterioradas y deslegitimadas políticas gubernamentales sufrieron un estrangulamiento.

Como resultado, Lula da Silva ganó las elecciones generales de octubre del 2002, y llegó al poder como la fuerza más votada tras tres derrotas electorales en los comicios de 1989, 1994 y 1998. De esta forma, este proceso electoral puso fin a un periodo de transformación y deterioro del modelo nacional desarrollista, que había comenzado con la implementación de estrategias de estabilización e instrumentos ortodoxos de ajuste, en el seno de la crisis política y la recesión económica de la década de 1960. Sobre esta base se vio configurado el modelo periférico de capitalismo dependiente, asociado a la Doctrina de Seguridad Nacional. A través de él, la dictadura militar promovió una estabilización macroeconómica por medio de una expansión sin precedentes (el 'milagro brasileño'), asociada al fomento de macroproyectos de infraestructura, la concentración del capital y las empresas, la atracción de capital extranjero, y el abandono de las políticas redistributivas. A pesar del aparente éxito del modelo en términos de crecimiento económico, las crisis del petróleo visibilizaron el problema del endeudamiento externo como cuello de botella. Frente a este contexto, el ajuste estructural, la libre competencia y la modernización productiva se convirtieron en los motores del crecimiento económico del ideario neoliberal, conduciendo a un proyecto ligado al mercado, la competencia y la innovación. No obstante, sobre el final de la década de 1990, el limitado éxito de la frágil estabilización macroeconómica devolvió el debate a la escena

política, lo cual se tradujo en un retorno de la necesidad de reajustar el modelo desarrollista frente a la hasta entonces dominante necesidad de superarlo y reemplazarlo.

Neodesarrollismo y social-desarrollismo, políticas sociales y liderazgo internacional

Con el ascenso de gobiernos de la “nueva izquierda” al poder, el giro ideológico que se extendió en la política de Latinoamérica durante los primeros años del siglo XXI fue denominado como “socialismo del siglo XXI”⁹. Más allá de la heterogeneidad de las experiencias sintetizadas bajo el paraguas de este concepto (Dabène 2012; Gaudichaud y Posado 2020), la nueva opción político-ideológica respondió al despliegue del neoliberalismo en la región durante la década previa, adoptando, como respuesta, una retórica que apeló a la necesidad de rehabilitar el rol del Estado democrático en la promoción del desarrollo y en la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales. Este conjunto de ideas se vio encarnado por diversos jefes de Estado, como Michelle Bachelet en Chile (2006; 2014); Tabaré Vázquez (2005; 2015) y José Mujica (2010) en Uruguay; Evo Morales en Bolivia (2006); Hugo Chávez en Venezuela (1999); Rafael Correa en Ecuador (2007) y Néstor Kirchner (2003) y Cristina Fernández (2007) en Argentina. Sin abrazar una ruptura con el neoliberalismo ni renunciar a la ambición de reformas sistémicas, las nuevas corrientes políticas no constituyeron casos aislados, sino que estuvieron mutuamente vinculadas entre sí, adquiriendo una fuerte dimensión inter y transnacional. Fue, precisamente, dentro de este proceso, que el líder sindicalista Luis Inácio Lula da Silva asumió el cargo de presidente de la República brasileña.

Gran parte del éxito del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones fue producto de su posicionamiento adverso a la propuesta del candidato oficialista, José Serra, continuista de las políticas neoliberales implementadas a lo largo de la década previa. Frente a ello, el eje de campaña del PT pregonaba la profundización de las políticas sociales iniciadas en la última etapa del gobierno de Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), frente al empeoramiento de las condiciones de vida de las clases populares brasileñas. Esta promesa se integró, a su vez, al cambio de estrategia de Lula da Silva hacia una posición más conciliadora. De la mano de las políticas en materia de inclusión social, el gobierno petista decidió evitar la confrontación con el capital y calmar a los mercados, manteniendo una política económica conservadora y prometiendo dar continuidad al ciclo hegemónico liberal inaugurado por su antecesor (Bresser-Pereira 2007, 216). Para tal fin, planificó su gestión sobre dos pilares centrales articulados entre sí. Por un lado, la Constitución de

⁹ En particular desde el V Foro Social Mundial en 2005 y la utilización del concepto por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

1988, punto de partida del renovado compromiso democrático del país y garante de los derechos políticos y sociales. Por el otro lado, el Plan Real de estabilización económica de 1994 que, a través de políticas macroeconómicas ortodoxas, buscaba evitar el fantasma de la inflación.

Con el objetivo de mantener el apoyo popular, la retórica gubernamental concentró su atención en asociar las políticas de estabilización a las ventajas que traería un crecimiento duradero. Ello implicaba la posibilidad de implementar una serie de políticas de democratización del acceso a los recursos y la apertura de canales de ascenso social. Así, el rol activo del Estado en la incorporación de las clases populares y los estratos intermedios al orden competitivo garantizó una profundización de la hegemonía liberal, acompañada por la absorción de líderes populares a la estructura gubernamental. A través de este mecanismo, el gobierno fue artífice de un esquema de convivencia política, articulado en torno a un acuerdo de gobierno con las corrientes liberales hegemónicas del empresariado, y los sectores clientelistas y conservadores de la clase política, atenuando “el potencial transformador del PT y de sus aliados de izquierda” (Sallum Jr. 2008, 167).

Este esquema quedó plasmado a partir del *Plan Brasil de Todos: Participación e inclusión*¹⁰ de 2003 que, integrando las dimensiones social, económica, regional, ambiental y democrática, trazó el objetivo de alcanzar un crecimiento sostenible, duradero, con equidad social y sin dejar de lado la estabilidad institucional y macroeconómica. Como consecuencia, el Estado debía ser capaz de coordinar y articular intereses con el objetivo de generar empleo, atacar la pobreza y las desigualdades sociales y regionales, y aumentar, a su vez, la productividad de la mano del fomento de la inversión pública y privada. Ello fue central en el establecimiento de la prioridad en las dimensiones social, económica e institucional (Brasil 2003) del PPA 2003-2007.

Se entiende, así, por qué, desde el punto de vista productivo, el gobierno impulsó su inserción global como gran oferente de agroalimentos, productos minerales y otros sectores relacionados con la exportación de recursos naturales. Aprovechando el boom de los precios de las materias primas¹¹ posterior al periodo de turbulencia de finales de 1990¹², la administración centró su estrategia de crecimiento económico en el superávit de la balanza comercial. Esto permitió al país salir del estrangulamiento que había presionado a Cardoso en el periodo 1999-2002¹³, dejando de lado el proyecto desarrollista de diversificación de la matriz exportadora y enfrentando, en cambio, un proceso de reprimarización de las exportaciones. Los recursos naturales desempeñaron, de esta manera, un rol creciente a lo largo del periodo 2002-2010,

¹⁰ En portugués, Plano Brasil de Todos. Participação e Inclusão. Orientação Estratégica de Governo: Crescimento Sustentável, Emprego e Inclusão Social. Maio, 2003.

¹¹ Con una valorización media del 89% en el periodo 2002-2006 según la UNCTAD (Libânio en Singer 2012, 175).

¹² Que integró la crisis asiática de 1997, la rusa de 1998, la brasileña de 1999 y la argentina del 2001.

¹³ Ello permitiría, además, cancelar la deuda del país con el FMI en el año 2005.

transformando a Brasil en uno de los mayores exportadores de materias primas del mundo¹⁴. Este proceso se vio acompañado por una exitosa política exterior, como instrumento fundamental para la diversificación de socios comerciales y la atracción de capital extranjero. La estabilidad macroeconómica y la confianza del mercado internacional en el país tuvieron como resultado un fuerte incremento de la inversión extranjera directa (IED), transformando a Brasil en el primer receptor de IED a nivel regional y el cuarto a nivel mundial. Por supuesto, tales factores externos hubieran sido insuficientes sin el “descubrimiento” de un mercado interno de 200 millones de habitantes, que se transformó, durante este periodo, en el motor del modelo productivo.

De la mano de los ingresos extraordinarios generados a partir del superávit de la balanza comercial y la IED, el Estado fue capaz de formular una serie de políticas sociales que, además de generar una redistribución de la riqueza, dieron acceso al círculo económico a grandes contingentes poblacionales. La explosión del consumo produjo un fuerte crecimiento del empleo formal a corto plazo¹⁵, facultando que 29 millones de personas se unieran a las filas de la “nueva clase media” entre 2003 y 2009 (Santos Pinho 2012, 16-18). En esta estructura, el proyecto “Hambre Cero: Una propuesta de política de seguridad alimentaria para el Brasil”¹⁶ fue central a la hora de introducir la lucha contra el hambre y la pobreza, de la mano de los Programas Hambre Cero (FZ), Adquisición de Alimentos (PAA) y Bolsa Familia (BF). Esta lectura fue profundizada a través de la posterior Ley de Seguridad Alimentaria N° 11.346 (2006) y de la refundación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA). Tales iniciativas fortalecieron el concepto de soberanía alimentaria, central en una estrategia de desarrollo exteriorizada regional y globalmente¹⁷.

Como fue previamente mencionado, la clave del modelo de desarrollo se asentó en la transmisión de las ganancias del incremento de la productividad a las familias trabajadoras, aumentando la competitividad de la producción nacional gracias a la expansión del mercado interno y modernizando la economía gracias a la inversión pública y privada. Como consecuencia, se generó un circuito interdependiente entre inversiones, ganancias de productividad y familias trabajadoras (Lessa, Couto y Farias 2009, 89-90). En 2006, Guido Mantega pasó a ser Ministro de Hacienda, y se transformó en el principal promotor de un mayor activismo estatal en la economía. En

¹⁴ Primer exportador mundial de café, caña de azúcar, naranjas, carne vacuna y avícola; segundo productor mundial de soja; segundo productor y mayor exportador de etanol; segundo productor mundial de hierro; tercer productor de bauxita; líder mundial en producción de celulosa de eucalipto; tercer mayor exportador de maíz, etc. (Singer 2012, 175-180).

¹⁵ El número total de empleos formales generados en el período 2003-2010 fue de 15.048.311 según datos oficiales.

¹⁶ Parte de la plataforma política del PT desde el año 2001.

¹⁷ Esta estrategia fue uno de los ejes del compromiso del país en los procesos de integración regional. Se tradujo, por ejemplo, en su participación en la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre, el Diálogo Brasil-África sobre Seguridad Alimentaria, la Lucha contra el Hambre y Desarrollo Rural, y la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

continuidad con las políticas previas, su Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) (2007) sistematizó la figura de la asociación como mecanismo articulador entre sector público y privado. Con ello, se pretendió recuperar la productividad de las empresas estatales no privatizadas de la mano de empresas privadas (sobre todo, nacionales). Así, mientras que el sector público definía las prioridades y realizaba inversiones, el privado gestionaba la obra una vez finalizada, con una rentabilidad mínima garantizada por el Estado. Ello permitía, en principio, mejorar la capacidad de competencia de las empresas brasileñas en relación con las multinacionales en el país, e incluso, en el extranjero.

El PPA 2008-2011 mantuvo las mismas prioridades, al tener como ejes el crecimiento económico, la agenda social y una educación de calidad (Brasil 2007), pero añadió, también, el concepto de autonomía energética. A través de éste, se promocionó la idea de un desarrollo sostenible basado en los biocombustibles que profundizó, a su vez, el compromiso estatal en materia de combustibles fósiles. Esta estrategia se vio instrumentalizada, principalmente, por medio de la expansión de Petrobras y la riqueza del Pré-Sal en la estrategia de desarrollo. Además, las bases del PPA destacaron la centralidad de la integración regional en el desarrollo del país, ofreciendo continuidad a propuestas como la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), de gran presencia desde la implicación del BNDES en 2005. La política de desarrollo de Lula mantuvo una relación directa con su política exterior (Pereyra Doval 2017, 175-176).

El liderazgo regional de Brasil, la diversificación de sus intercambios por medio del fomento de relaciones bilaterales y multilaterales, la conformación de bloques comerciales con países del Sur Global de América, Asia y África, y su rol como propulsor de los mecanismos de cooperación Sur-Sur le llevaron a ejercer un protagonismo creciente tanto a nivel latinoamericano como mundial (Crescentino y Caballero, en imprenta). En este sentido, su compromiso con un desarrollo que pretendía ir más allá del ámbito económico se tradujo en constantes intervenciones en los centros tradicionales de toma de decisiones a nivel internacional (como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial). Sumado a ello, su empuje en antiguas alianzas comerciales como el MERCOSUR; y su rol fundamental como miembro de nuevas conformaciones político/económicas, como BRICS, IBSA o UNASUR, lo llevaron a ejercer un poder de influencia sin precedentes.

Así pues, Luiz Carlos Bresser-Pereira caracteriza este modelo de desarrollo bajo el concepto de *neodesarrollismo*. Se trata de un discurso superador del nacional-desarrollismo (populista) y del neoliberalismo (ortodoxia convencional), que combina el pensamiento keynesiano y el neoestructuralista arrojado por la CEPAL. Ello es posible a través de cuatro ideas rectoras: a) no

es factible la existencia de un mercado fuerte sin un Estado fuerte; y por tanto b) el crecimiento sostenido a tasas elevadas está condicionado al fortalecimiento de esas dos instituciones y la adopción de políticas macroeconómicas adecuadas. Por otra parte, c) un mercado y un Estado fuertes sólo pueden existir gracias a un proyecto de desarrollo nacional, que aglutine un crecimiento económico sostenido con equidad social, superando la disyuntiva Estado/mercado. Por último, d) la reducción de la desigualdad social es inconcebible sin el crecimiento a tasas elevadas y continuas. En consecuencia, el presupuesto básico del neodesarrollismo consiste en la capacidad de combinar la trayectoria desarrollista con los fundamentos de la estabilidad y la integración de los países a los circuitos financieros y comerciales globalizados en creciente interconexión (Santos Pinho 2012, 12-13; Siscú, Paula y Michel 2007, 509).

Aplicado al periodo de gobierno de Lula da Silva, el neodesarrollismo se manifestó en la búsqueda de un crecimiento económico que, sin romper con los límites impuestos por el modelo neoliberal, echó mano de políticas económicas y sociales de corte heterodoxo a fin de mitigar las consecuencias de las políticas neoliberales. A diferencia del *nacional-desarrollismo*, este *desarrollismo en tiempos neoliberales*

(i) tiene un crecimiento económico que, si bien es mucho mayor que el de la década de 1990, es mucho más modesto que el que brindaba el viejo desarrollismo; (ii) da menos importancia al mercado interno; (iii) concede menos importancia a la política de desarrollo del parque industrial local; (iv) acepta las limitaciones de la división internacional del trabajo promoviendo, bajo nuevas condiciones históricas, una reactivación de la función exportadora primaria del capitalismo brasileño; (v) tiene una menor capacidad distributiva de ingresos y (vi) (...) es impulsado por una facción burguesa que ha perdido todo interés en actuar como una fuerza antiimperialista (Boito Jr. y Berringer 2013, 32).

Por supuesto, esta estrategia no careció de dificultades y contradicciones, tanto por problemas al interior de la alianza gobernante, como por el contexto internacional. Ello fue palpable a través de las diferentes crisis políticas que atravesó el gobierno petista. A partir del año 2005, Lula tuvo que hacer frente a una crisis institucional derivada del *mensalão*, un escándalo político relacionado a casos de corrupción en la Cámara de Diputados, que dio paso a una serie de procesos judiciales que descabezaron al PT. Así, la necesidad de encontrar una nueva salida a esta crisis condujo a la construcción¹⁸ de Dilma Rousseff como candidata para las elecciones de 2010.

De origen cercano al desarrollismo brizolista¹⁹, la entonces Ministra de Minas y Energía y de la Casa Civil experimentó un rápido ascenso gracias a la labor desplegada por el expresidente, quien buscó darle mayor relevancia pública durante su segundo mandato. Como consecuencia, el

¹⁸ En marzo de 2009, Dilma era desconocida por 47% de la población, según pesquisa del Datafolha. Un año después, 87% de los entrevistados conocían a la futura presidenta (Gadret 2011).

¹⁹ Leonel Brizola fue uno de los líderes políticos más importantes de Río Grande del Sur, discípulo de Getúlio Vargas y asesor de João Goulart.

31 de octubre de 2010 ganó las elecciones presidenciales con cerca de 55,8 millones de votos (56%). El compromiso, exteriorizado en sus discursos de campaña, con la fundación de una nueva matriz económica, parecía dirigir esfuerzos hacia la profundización del modelo de desarrollo vigente, transformándolo en lo que la bibliografía especializada ha denominado *social-desarrollismo* (Bastos 2012; Carneiro 2012; Biancarelli y Rossi 2014). Esta consolidación del modelo lulista se vio plasmada en el mantenimiento de Mantega en el Ministerio de Hacienda, y el nombramiento de Alexandre Tombini en reemplazo del liberal Henrique Meirelles en la presidencia del Banco Central de Brasil.

A pesar de las promesas de campaña, el contexto enfrentado por el nuevo gobierno fue muy diferente al encontrado por su antecesor. El periodo 2011-2014 estuvo enmarcado en una profunda crisis internacional que perduró en el tiempo, producto del descenso los precios de las materias primas. Como consecuencia, a pesar de que la administración de Rousseff posibilitó, en mayor o menor medida, la prolongación del proyecto petista, las medidas tomadas en 2011 presionaron a un empresariado que había gozado de una posición privilegiada durante los años previos, erosionando profundamente la alianza de gobierno. En continuidad con los lineamientos del gobierno de Lula, el Plan Más Brasil 2012-2015 hizo hincapié en la reducción de las desigualdades sociales (pobreza extrema) y regionales (rurales y urbanas), el énfasis en la ciencia, la tecnología y la innovación, la centralidad de la educación, y el desarrollo productivo y ambiental (Brasil 2011). La estrategia de desarrollo se vio traducida, de esta manera, en planes como Brasil Sin Miseria, el Programa Brasil Mayor, el PAC 2 o Ciencia sin Fronteras.

Como explica Singer (2015, 43-45), a lo largo de este periodo, el gobierno adoptó una serie de iniciativas que tenían como objetivo salvaguardar las prioridades del ensayo desarrollista, alterando, parcialmente, el compromiso con la estabilidad macroeconómica a cambio de mantener pleno empleo y elevar la masa salarial. Algunos de los múltiples frentes abiertos por el nuevo gobierno implicaron, así, el uso intensivo del BNDES para potenciar el Programa de Apoyo a la Inversión (PSI) y acompañar el proceso de reindustrialización (a través del mencionado Programa Brasil Mayor), la gestión de exoneraciones fiscales para sectores de uso intensivo de mano de obra, la alta inversión en infraestructura (a través, por ejemplo, del Programa de Inversiones en Logística), la reforma del sector eléctrico, la fuerte devaluación del real (en casi un 20% durante el periodo), el control de capitales para evitar que la entrada de dólares apreciara el real, y la promoción de la producción nacional a través de impuestos a las importaciones y programas de compras gubernamentales.

En este contexto, una de las manifestaciones más determinantes del accionar político de Rousseff quedó expuesta en su discurso del 1º de mayo de 2012, cuando la mandataria centró sus

ataques en las ganancias extraordinarias del sistema financiero brasileño. Ello se tradujo, de facto, en una intervención de la política monetaria entre 2011 y 2012, presionando a las instituciones privadas para que redujeran sus ganancias con el apoyo de los bancos públicos. A lo largo de todo el periodo, se manifestó, así, un juego de fuerza que no concluyó hasta 2013. Fue entonces cuando, a pesar de que el debate parecía ganado, el Banco Central devolvió el control al mercado financiero para controlar la inflación (una política abiertamente neoliberal). Producto de ello se vio resquebrajada la base de sustento del modelo de desarrollo, obstaculizando la posibilidad de reanudar el desarrollo nacional y deteniendo el avance progresista (Singer 2015, 40).

Esta correlación de fuerzas contribuyó a que, paulatinamente, y pese a haber mantenido su buena imagen en los primeros años de gobierno, Rousseff fuese perdiendo su popularidad. A la presencia de brechas y críticas intrapartidarias, se sumaron fuertes reparos al intervencionismo estatal en la arena económica de parte de organismos financieros internacionales, agencias de medición del riesgo, bancos y corporaciones. Acompañado por todas ellas, el constante ataque de los principales medios de comunicación del país fue desgarrando las costuras que mantenían la cohesión política de la alianza. Gradualmente, sus votantes fueron restando apoyos al gobierno, generando movilizaciones populares rápidamente cooptadas por los partidos políticos de oposición. Con ello, lo que comenzó como una protesta frente al aumento del precio del transporte público en la ciudad de San Pablo, terminó generando un efecto bola de nieve que integró reivindicaciones de todo tipo, como mejoras en la educación, en la salud y contra la inseguridad.

En 2014, en el seno de unas elecciones cargadas de una polarización política profunda y transversal (Reis 2017), la candidata retornó al discurso social-desarrollista, destituyendo, sin embargo, a Guido Mantega en medio de la campaña. A través de esta simbólica acción, Rousseff envió una clara señal de la transformación que adoptaría durante su segundo mandato (2015-2016). La implementación de políticas económicas ortodoxas y de austeridad promovidas por el Ministro de Economía, Joaquim Levy, y las políticas conservadoras de un Congreso liderado por Eduardo Cunha (del PMDB, su entonces aliado político), se integraron, rápidamente, a los escándalos de corrupción del *Lava Jato* y el *Petrolão*, provocando una profunda pérdida de apoyo de las bases sociales del gobierno. Más aún, las promesas de un “giro a la izquierda” durante la campaña presidencial de 2014 fueron rotundamente ignoradas: de un pacto por construir una *Patria Educadora*, se pasó a fomentar recortes en varios sectores de la educación. De la mano de estos límites internos, la fuerte ofensiva restaurativa del campo neoliberal ortodoxo consiguió generar una alternativa política en su intento por iniciar una nueva ola de reformas neoliberales (Boito Jr. 2016, 155), y restó grandes apoyos a la coalición política gobernante (particularmente, de las clases medias y la burguesía empresarial). Con todo en su contra, el partido perdió sustancialmente sus

bases de apoyo, y la alianza que había servido de sustento a los modelos neo y social-desarrollista encontró su fin. Desde finales de 2015, de sus propias entrañas fue ganando fuerza el proceso de *impeachment*, que terminó por gestar el golpe institucional a Dilma Rousseff, en mayo de 2016.

Conclusiones

En el presente artículo se pretendió formular un análisis macrohistórico en torno a la comprensión de las ideas, los discursos y las claves político-normativas-sociales-económicas que posibilitaron las diversas lecturas sobre el desarrollo en Brasil, en el periodo comprendido entre la estrategia nacional-desarrollista esbozada desde 1930, y el golpe institucional que dio por concluido el experimento neo y social-desarrollista, en 2016. Se entiende, así que estas múltiples narrativas configuraron tanto los modelos de crecimiento, como las estrategias nacionales de inclusión social durante los siglos XX y XXI. A través de este recorrido genealógico, se pretendieron desentrañar las múltiples formas en que se vieron concertadas las alianzas gobernantes, así como los objetivos, fortalezas y límites de los modelos de desarrollo aplicados. Se entiende, así, que sólo a través de una lectura compleja e integrada de los procesos políticos, económicos y sociales se hace posible apreciar el alcance de las estrategias de desarrollo formuladas por los distintos gobiernos, e intentar esbozar, con ello, sus influencias en escenarios futuros.

En efecto, la situación del Brasil actual resulta espacialmente paradigmática para este análisis. El recorrido trazado permite observar cómo las estrategias de desarrollo concretadas a partir de modelos de crecimiento económico focalizados en el consumo, aunque acompañados de políticas de reducción de la pobreza y redistributivas, no han resultado suficientes para afrontar las problemáticas estructurales del país. En este sentido, tampoco los recientemente aplicados modelos neodesarrollista y social-desarrollista consiguieron ofrecer respuestas al racismo estructural de un país en el cual decenas de jóvenes negros son asesinados diariamente por la policía; a la violencia de género y hacia la comunidad LGTBQ+, cuyas tasas de homicidio se encuentran entre las más altas del mundo; a las tasas de escolarización, sin acompañar, de facto, una mejora sustancial de la educación; a la guerra contra las drogas, que afecta profundamente a los sectores marginados; al precario sistema de transporte; o a la inconclusa reforma política. Más aún, el cambio de era de magnitud sistémica en el cual se ha visto inmerso internacionalmente el país tras la crisis financiera internacional no ha hecho más que abrir nuevos interrogantes en torno a los límites de las estrategias brasileñas de desarrollo nacional.

En este marco, como argumentan Caballero y Crescentino (2020), a pesar de que se torna complejo caracterizar el nuevo paradigma internacional en ciernes, las nuevas tendencias domésticas e internacionales incorporan alteraciones en el seno de una profunda crisis de

globalización, que incluye grandes transformaciones en la economía (digitalización, relocalización y agotamiento capitalista), en las sociedades (desafección social, reinversiones nostálgicas nacionalistas de pasados inexistentes) y en la política internacional (giro geopolítico de Estados Unidos a China, deslegitimación institucional e instrumentalización de los miedos como estrategia política). Frente a tales variables, repensar el rol que han desempeñado las interpretaciones de los diversos intereses nacionales y su puesta en práctica por medio de estrategias de desarrollo nacional se torna una clara prioridad epistémica.

Ello se torna más necesario, aún, si procuramos comprender un escenario político en el cual, de manera diferente a la de los países del Norte Global, muchos de los mayores beneficiarios de las estrategias neo y social-desarrollista, se tornaron sus enérgicos críticos (Pinheiro-Machado y Scalco 2020). Y es que, además de en una profunda crisis institucional, política y económica, Brasil se encuentra inmerso en una crisis de identidad. Como ha reflexionado la periodista brasileña Eliane Brum (2015), “Brasil es hoy una criatura que no se reconoce en el espejo de su imagen simbólica”: el país *verdeamarelo* ya no puede contar más con sus clichés del país de fútbol y del pueblo cordial. Esta idea ya no resiste a la realidad histórica, especialmente, con el ascenso y mantenimiento en el poder de una alianza liberal-conservadora de ultraderecha en el escenario político nacional.

Referencias bibliográficas

- Almeida, Paulo Roberto de. “Planejamento no Brasil: memória histórica”. *Parcerias estratégicas*, 18, 1 (2004): 157-190.
- Arend, Marcelo. “50 Anos de industrialização do Brasil (1955-2005): uma análise evolucionária”. Tese, Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009.
- Bachiller Cabria, Juan Vicente. “El Estado y las estrategias nacionales de desarrollo en Brasil. Evolución y trayectorias recientes”. *Anuario Americanista Europeo*, 10 (2012): 3-21.
- Basbaum, Leôncio. *História sincera da República. 1930 a 1960*. São Paulo: Alfa-ômega, 1985.
- Bastos, Pedro Paulo Zahluth. “A economia política do novodesenvolvimentismo e do social desenvolvimentismo”. *Economia e sociedade*, 21, spe. (2012): 779-810.
<https://doi.org/10.1590/S0104-06182012000400004>
- Biancarelli, André M. y Pedro L. Rossi. “A política macroeconômica em uma estratégia social-desenvolvimentista”. *Revista Brasileira de Planejamento e Orçamento*, 4, 1 (2014): 21-38.
- Boito Jr., Armando y Tatiana Berringer. “Brasil: classes sociais, neodesenvolvimentismo e política externa nos governos Lula e Dilma”. *Rev. Sociol. Polít.*, 21, 47 (2013): 31-38.
<https://doi.org/10.1590/S0104-44782013000300004>
- Boito Jr., Armando. “A crise política do neodesenvolvimentismo e a instabilidade da democracia”. *Crítica Marxista*, 42 (2016): 155-162.
- Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. *Plano plurianual 2004-2007: projeto de lei*. Brasília: MP, 2003.
-

- Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. *Plano plurianual 2008-2011: projeto de lei*. Brasília: MP, 2007.
- Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. *Plano plurianual 2012-2015: projeto de lei*. Brasília: MP, 2011.
- Bresser-Pereira, Luiz Carlos. “La estrategia de crecimiento con ahorro externo y la economía brasileña desde principios de la década del noventa”. Em *Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización*, orgs. Gregorio Vidal y, Arturo Guillén R., 213-237. Buenos Aires: Clacso, 2007.
- Bresser-Pereira, Luiz Carlos. “O Conceito de Desenvolvimento do ISEB Rediscutido”. *Dados - Revista de Ciências Sociais*, 47, 1 (2004): 49-84. <https://doi.org/10.1590/S0011-52582004000100002>
- Brum, Eliane. “Por quién gruñe Brasil”. *El País*, Julio 21, 2015. http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/21/actualidad/1437439889_169762.html
- Caballero, Sergio y Diego Crescentino. “From the quest for autonomy to the dual break: structural and agential changes in Brazil’s foreign policy during the 21st century”, *Rev. bras. polít. int.*, 63, 1 (2020): e011. <https://doi.org/10.1590/0034-7329202000111>
- Cancelli, Elizabeth. *O mundo da violência. A política da era Vargas*. Brasília: UnB, 1993.
- Carneiro, Ricardo de Medeiros. “Velhos e novos desenvolvimentismos”. *Economia e sociedade*, 21, spe. (2012): 749-778. <https://doi.org/10.1590/S0104-06182012000400003>
- Cervo, Amado Luiz. “Relações internacionais do Brasil: um balanço da era Cardoso”. *Rev. bras. polít. int.*, 45, 1 (2002): 5-35. <https://doi.org/10.1590/S0034-73292002000100001>
- Crescentino, Diego y Caballero, Sergio. “Arquitectura de la política exterior brasileña: autonomistas, institucionalistas pragmáticos y americanistas en Itamaraty”, *Araucaria* (en imprenta).
- Dabène, Olivier. *La gauche en Amérique latine, 1992-2012*. Paris: Presses de Sciences Po, 2012. <https://doi.org/10.3917/scpo.daben.2012.01>
- Dabène, Olivier. *América Latina en el siglo XX*. Madrid: Síntesis, 1999.
- Dinius, Oliver. *Brazil's Steel City: Developmentalism, Strategic Power, and Industrial Relations in Volta Redonda, 1941-1964*. Stanford: Stanford University Press, 2010. <https://doi.org/10.11126/stanford/9780804771689.001.0001>
- Fausto, Boris. *História do Brasil*. São Paulo: EDUSP, 2012.
- Fico, Carlos. *O Grande irmão: da Operação Brother Sam aos anos de chumbo. O governo dos Estados Unidos e a ditadura militar brasileira*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
- Gaudichaud, Franck y Thomas Posado. *Gouvernements progressistes en Amérique latine (1998-2018): La fin d'un âge d'or*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2020. <https://doi.org/10.4000/books.pur.142980>
- Gadret, Débora. “Os enquadramentos de Dilma Rousseff no Jornal Nacional: suspeição, humanização e competência”. Dissertação, Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011.
- Gertz, René. “Estado Novo: Um inventário historiográfico”. Em *O feixe e o prisma. Uma revisão do Estado Novo*, org. José Luiz Werneck da Silva, 111-131. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991.
- Gomes, Ângela Maria de Castro. *A invenção do trabalhismo*. Rio de Janeiro: FGV, 2005.
-

Grecco, Gabriela de Lima. “Redes de poder durante el ‘Estado Novo’ brasileño: los intelectuales autoritarios y la constelación Capanema”. *Revista Páginas*, 7, 15 (2015): 48-62.

<https://doi.org/10.35305/rp.v7i15.169>

Gremaud, Amaury Patrick; Marco Antonio Sandoval de Vasconcellos y Rudinei Toneto Júnior. *Economia Brasileira Contemporânea*. São Paulo: Atlas, 2004.

Hilton, Stanley E. “Vargas and Brazilian Economic Development, 1930–1945: A Reappraisal of his Attitude Toward Industrialization and Planning”. *The Journal of Economic History*, 35, 4 (1975): 754-778. <https://doi.org/10.1017/S0022050700073757>

Lessa, Antônio Carlos; Leandro Freitas Couto y Rogério de Souza Farias. “Política externa planejada: os planos plurianuais e a ação internacional do Brasil, de Cardoso a Lula (1995-2008)”. *Rev. bras. polít. int.*, 52, 1 (2009): 89-109. <https://doi.org/10.1590/S0034-73292009000100005>

Linz, Juan J. y Alfred Stepan. *A transição e consolidação da democracia*. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

Machado, Gustavo Viana. “A internacionalização da economia brasileira nos anos 90”. *OIKOS – Revista de Economia Heterodoxa*, VII, 10 (2008): 79-99.

Marini, Ruy Mauro. “La dialéctica del desarrollo capitalista en Brasil (1966)”. En *América Latina, dependencia y globalización. Fundamentos conceptuales*. Ruy Mauro Marini. *Antología y presentación*, org. Carlos Eduardo Martins, 25-106. Bogotá: Siglo del Hombre - CLACSO, 2008.

Mendonça, Sonia Regina de. *Estado e economia no Brasil: Opções de desenvolvimento*. Rio de Janeiro: Graal, 2008.

Moura, Gerson. *Autonomia na dependência: a política externa brasileira de 1935 a 1942*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.

Pandolfi, Dulce. *Repensando o Estado Novo*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999.

Pereyra Doval, María Gisela. “Política exterior y modelos de desarrollo: Argentina y Brasil en perspectiva comparada (1930-2010)”. *Apuntes*, 44, 80 (2017): 159-185. <https://doi.org/10.21678/apuntes.80.908>

Pérez Brignoli, Héctor. *Historia global de América Latina. Del siglo XXI a la independencia*. Madrid: Alianza, 2018.

Pinheiro-Machado, Rosana y Lucia Mury Scalco. “From hope to hate: The rise of conservative subjectivity in Brazil”. *HUA: Journal of Ethnographic Theory*, 10, 1 (2020): 21-31. <https://doi.org/10.1086/708627>

Reis, Fábio Wanderley. “Crise política: a ‘opinião pública’ contra o eleitorado”. Em *Encruzilhadas da democracia*, orgs. Luis Felipe Miguel y Flávia Biroli, 15-44. Porto Alegre: Zouk, 2017.

Salas Oroño, Amílcar y Lucila Melendi. “El desarrollismo en Brasil y Argentina: notas para un estudio comparativo”. *e-I@tina*, 15, 58 (2017): 36-56.

Sallum Jr., Brasílio. “Metamorfoses do Estado brasileiro no final do século XX”. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 18, 52 (2003): 35-55. <https://doi.org/10.1590/S0102-69092003000200003>

Sallum Jr., Brasílio. “La especificidad del gobierno de Lula: Hegemonía liberal, desarrollismo y populismo”. *Nueva Sociedad*, 217 (2008): 155-171.

Santos Pinho, Carlos Eduardo. “O Nacional-Desenvolvimentismo e o Novo-Desenvolvimentismo no Brasil: Expansão interna, externa e o discurso social-democrata”. *Revista de Ciência Política achegas.net*, 45 (2012): 3-32.

Silva, Hélio. *O Estado Novo. 1937-38*. São Paulo: Três, 1975.

Silva, Ricardo. “Planejamento econômico e crise política: do esgotamento do plano de desenvolvimento ao malogro dos programas de estabilização”. *Revista de Sociologia e Política*, 14 (2000): 77-101. <https://doi.org/10.1590/S0104-44782000000100005>

Singer, André. *Os sentidos do lulismo. Reforma gradual e pacto conservador*. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

Singer, André. “Cutucando onças com varas curtas: o ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014)”. *Novos Estudos Cebrap*, 102 (2015): 39-67.

Siscú, Joao; Luiz Fernando Paula y Michel Renaut. “Por que novo-desenvolvimentismo?”. *Revista de Economia Política*, 27, 4 (2007): 507-524. <https://doi.org/10.1590/S0101-31572007000400001>

Skidmore, Thomas. *Brasil: de Getúlio a Castelo (1930-1960)*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

Vizentini, Paulo Fagundes. *Relações internacionais do Brasil. De Vargas a Lula*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005.

Wasserman, Claudia. “La perspectiva brasileña del desarrollo y de la integración latinoamericana y regional (1945-1964): intelectuales, políticos y diplomacia”. *Universum*, 12, 25 (2010): 195-213. <https://doi.org/10.4067/S0718-23762010000200013>

Recibido: 29 de junio de 2021
Aprobado: 12 de julio de 2021